

REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

AÑO XXXIII — OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1965 — N° 134

DIRECTOR: ORLANDO TAPIA SUAREZ

CONSEJO CONSULTIVO:

MANUEL SANHUEZA CRUZ

EMILIO RIOSECO ENRIQUEZ

JUAN BIANCHI BIANCHI

MARIO CERDA MEDINA

LUIS HERRERA REYES

JORGE ACUÑA ESTAI

ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA CONCEPCION — (CHILE)

CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCION

ROCA VIDAL HENRIQUEZ Y OTROS

CON EL FISCO

RECLAMACION DE AVALUO (EXPROPIACION)

Apelación de incidente.

**LEY PROCESAL — ACTOS JUDICIALES — ACTOS JUDICIALES CON-
TENCIOSOS — CONTIENDA CIVIL ENTRE PARTES — JUICIO — AC-
TOS NO CONTENCIOSOS — PROCEDIMIENTO — PROCEDIMIENTO
ORDINARIO — PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO — ACTOS DE JU-
RISDICCION VOLUNTARIA — ACTOS DE JURISDICCION NO CONTEN-
CIOSA — TRANSFORMACION DE LOS ACTOS NO CONTENCIOSOS EN
CONTENCIOSOS — OPOSICION — LEGITIMO CONTRADICTOR — RE-
SOLUCIONES JUDICIALES — CARACTERISTICAS DE LAS RESOLU-
CIONES RECAIDAS EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS — RESOLU-
CIONES NEGATIVAS — REVOCABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES NE-
GATIVAS — RESOLUCIONES AFIRMATIVAS — REVOCABILIDAD DE
LAS RESOLUCIONES AFIRMATIVAS — MODIFICACION DE LAS RESO-
LUCIONES AFIRMATIVAS — EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES JU-
DICIALES — RESOLUCIONES CUMPLIDAS — RESOLUCIONES PEN-
DIENTES DE EJECUCION — INTERPRETACION DE LA LEY — HIS-
TORIA FIDEDIGNA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA LEY — RETRO-
ACTIVIDAD — PRINCIPIO DE LA NO RETROACTIVIDAD DE LAS RE-
SOLUCIONES JUDICIALES — TERCEROS — INTERESES DE TERCE-
ROS — EXPROPIACION — EXPROPIACION POR CAUSA DE UTILIDAD
PUBLICA — RECLAMACION DE AVALUO — JUICIO DE EXPROPIA-
CION — SENTENCIA DEFINITIVA — CUMPLASE DE LA SENTENCIA
— DECRETO DE PAGO — INDEMNIZACION — VALOR DE EXPROPIA-
CION — PROPIETARIO — EXPROPIADO — INMUEBLE EXPROPIADO
— REAJUSTE DEL MONTO DE LA INDEMNIZACION — SENTENCIA
DE PRIMERA INSTANCIA — FISCO — ESPIRITU DE LA LEY — GES-
TION ADMINISTRATIVA — DERECHO DE PROPIEDAD — ABSOLU-
TISMO DEL DERECHO DE DOMINIO — INTERES DE LA COLECTI-
VIDAD — FINALIDAD DE ORDEN PUBLICO DE LA EXPROPIACION.**

DOCTRINA.—Nuestra ley procesal distingue los actos donde hay contienda civil entre partes, de los actos de jurisdicción no contenciosa. Los primeros pueden dar lugar al procedimiento ordinario o extraordinario; los segundos tienen señalada su tramitación en el Libro IV del Código de Enjuiciamiento. Sin embargo, estos últimos bien pueden también transformarse en contenciosos cuando se hace oposición por legítimo contradictor, y en tal caso se debe seguir el juicio que corresponda.

Dentro de esta nomenclatura, la expropiación por causa de utilidad pública ha sido considerada como cuestión no contenciosa, y a ella se refiere el título IV del referido Libro IV, modificado por leyes posteriores.

En materias no contenciosas es aplicable el precepto contenido en el artículo 827 del Código de Procedimiento Civil, según el cual los Tribunales pueden, variando las circunstancias y a solicitud del interesado, revocar las resoluciones negativas que hayan dictado, sin sujeción a los términos y formas establecidos para los asun-

tos contenciosos; como asimismo, en igual caso, revocar o modificar las resoluciones afirmativas, con tal que esté aún pendiente su ejecución.

Del estudio de la historia fidedigna del establecimiento del aludido artículo 821 del Código de Procedimiento Civil y, en especial, del alcance de la expresión "que esté aún pendiente su ejecución", que él contiene, se infiere que el legislador se preocupó de no atentar contra la no retroactividad de las resoluciones judiciales ni de amagar los intereses de terceros, procurando, en todo caso, que no se cayera en el abuso de hacer rever un asunto para lograr las pretensiones que durante la tramitación normal no lograron alcanzarse.

Una vez dictado el cúmplase de la sentencia definitiva y de haberse ordenado la remisión al organismo correspondiente de las copias necesarias para la dictación del respectivo decreto de pago de la indemnización determinada, es improcedente la petición formulada por el propietario del inmueble expropiado en orden a que, en razón de no encontrarse cumplido el fallo dictado en la causa y ha-

EXPROPIACION

125

biendo variado las circunstancias que se consideraron hace más de un año para fijar el precio, se reajuste o aumente aquél en una proporción igual al alza que ha experimentado el costo de la vida desde la fecha de la sentencia de primera instancia.

En efecto, acceder a las pretensiones del recurrente equivaldría a darle un carácter retroactivo a la nueva resolución que se dictara en la causa, aparte de que con ello se vulneraría el interés del Fisco, que se ha opuesto a una nueva revisión del asunto, contrariándose con todo ello el espíritu del artículo 821 del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, cabe dejar constancia que la resolución cuya modificación se pretende, no se encuentra "pendiente en su ejecución" sino cumplida, pues estos términos deben entenderse en su sentido jurisdiccional, de manera que, salido el asunto de la esfera del campo procesal-judicial, ya no puede decirse que esté pendiente, máxime si, como consta de autos, en la especie el juez de la causa dictó el cúmplase y envió las copias para que se ex-

tendiera el respectivo decreto de pago, ejecutando de esta manera lo resuelto; revistiendo lo que resta para el término del asunto, carácter puramente administrativo, por lo que es ajeno al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Por último, negar lugar a lo pedido importa, también, interpretar la ley acorde con los principios que siguen en la actualidad las complejas relaciones económicas y sociales, las que han dado origen a un derecho cuyo absolutismo está cediendo paso a la evolución que han experimentado los intereses de la colectividad, no pudiendo ser indiferente, por lo demás, a los sentenciadores la finalidad de orden público que se persigue con la expropiación de que se trata en el caso de autos.

DOCTRINA VOTO DISIDENTE.—La expropiación consiste en un procedimiento de Derecho Público por el cual el Estado, mediante un acto unilateral, priva a una persona de un bien de su dominio en razón de utilidad pública calificada por una ley, incorporándolo definitivamente a su patrimonio,

previo el pago de la correspondiente indemnización.

Nuestra Constitución Política —en su artículo 10 N° 10— asegura a todos los habitantes de la República la inviolabilidad de todas las propiedades sin distinción alguna; agregando que nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial, o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una ley, evento este último en que se dará previamente al dueño la indemnización que se ajuste con él o que se determine en el juicio correspondiente.

La ley que autoriza la expropiación hace las veces de título y de modo de adquirir, de suerte que, una vez que la expropiación está consumada, produce, entre otros efectos, el de transferir al expropiante el pleno dominio del bien objeto de ella.

Mientras no se proporcione la debida indemnización al dueño del bien expropiado, la expropiación no ha llegado a su término ni se ha consumado, ya que no se ha cumplido con el requisito del pago previo de

dicha indemnización que la Carta Fundamental consulta y, por lo tanto, el dominio de la cosa expropiada permanece en el antiguo propietario. El pago o consignación determina, entonces, el momento en que la expropiación se perfecciona, y a partir de ese instante nacen para el organismo que expropia sus derechos sobre el bien y cesan los que hasta entonces tenía sobre el mismo el expropiado.

La desvalorización de la moneda debe ser considerada al efectuar el pago de una indemnización expropiatoria, si se desea que ésta corresponda a ser equivalente al sacrificio económico hecho por el propietario afectado. El proceso inflacionista que ha sufrido el país desde hace años, que se ha traducido en una manifiesta depreciación de la moneda, no puede ser excluido, sin atentar contra elementales principios de justicia y equidad, en la regulación de esa indemnización.

Si se considera, además, que la indemnización debe ser integral y justa, es decir, comprender no sólo el valor de la cosa expropiada, sino también los daños y perjuicios causa-

dos, y ser calculada de tal manera que, en lo posible, deje al propietario del bien en una situación similar a la que tenía con antelación al acto expropiatorio, resulta lógico concluir que, para conseguir estos objetivos, pueden los tribunales variar o modificar sus resoluciones en relación con el justiprecio o indemnización fijada al valor de la cosa expropiada mientras la expropiación no se perfeccione o se ejecute.

Esta conclusión es obvia si se considera que el trámite de la expropiación es un asunto de jurisdicción voluntaria o no contenciosa y, en consecuencia, le es aplicable el artículo 821 del Código de Procedimiento Civil, en cuya virtud "pueden los Tribunales, variando las circunstancias, y a solicitud del interesado, revocar o modificar las resoluciones negativas que hayan dictado, sin sujeción a los términos y formas establecidos para los asuntos contenciosos", como asimismo, "en igual caso, revocar o modificar las resoluciones afirmativas, con tal que esté aún pendiente su ejecución".

De consiguiente, si consta de autos que el organismo expro-

piante no ha cancelado todavía el valor del predio objeto de la expropiación, la que, por lo mismo, no se encuentra consumada, aparece atendible la petición formulada por los expropiados en orden a que se reajuste —habida consideración al tiempo transcurrido desde que se determinó su monto— el valor de la indemnización pertinente, ya que con ello se cumple en la especie con el principio que inspira este procedimiento en el sentido de que la valorización del inmueble que ha de expropiarse debe hacerse con relación al valor que tiene a la fecha de la expropiación, la que se perfecciona, como se ha dicho, en el momento en que se efectúa al interesado el pago de la indemnización. Con ello se trata de lograr que esta indemnización corresponda al valor actual de la cosa y sea el equivalente más apropiado a la verdadera estimación del bien de cuyo dominio se priva al propietario.

Sentencia de Segunda Instancia

Concepción, diez de Octubre de mil novecientos sesenta y cuatro.

Vistos y teniendo presente:

1º—Que en este expediente sobre pago de expropiación, se ha pedido por el propietario del inmueble expropiado, en presentación de fojas 180, que en razón de no encontrarse cumplido el fallo dictado en la causa y habiendo variado las circunstancias que se consideraron hace más de un año para fijar el precio, se reajuste o aumente en una proporción igual al alza que ha experimentado el costo de la vida desde la fecha de la sentencia de primera instancia, seis de Mayo de mil novecientos sesenta y tres, hasta Julio del presente año. Basa su petición en el artículo 10 N° 10 de la Constitución Política y en los artículos 915, 821, 822 y 817 del Código de Procedimiento Civil;

2º—Que el representante del Fisco ha solicitado a fojas 188 el rechazo de esta petición, porque no se trata en la especie de una causa de jurisdicción voluntaria, ya que la tramitación se tornó en el proceso contencioso, por lo que no procede modificar un fallo ya ejecutoriado;

3º—Que son hechos de la causa: a) que el apelante reclamó, por presentación de fojas 61, de la expropiación de un retazo de terreno de su propiedad avaluado en E° 10.432, estimando que se le ha perjudicado en varios miles de escudos, pues el verdadero valor de su predio es de E° 4.00 por metro cuadrado y tiene una extensión de 23.580 m²; b) que a fojas 62 vuelta, el Presidente de esta Corte designó al 3er. Juzgado para que conociera del asunto; c) que el Fisco se opuso a esta reclamación por considerarla extemporánea y solicitó en subsidio que el reclamo se limitara sólo a 8.580 m²., que es la porción que correspondería al reclamante; d) que hechas las tasaciones de rigor el Juez de la causa aumentó el valor de lo expropiado a E° 53.745,08, negando la limitación solicitada por el Fisco; e) del fallo de primera instancia apelaron tanto el reclamante como el Fisco; f) por fallo de cinco de Agosto de mil novecientos sesenta y tres esta Corte confirmó el de primera instancia sin modificaciones; g) el abogado del reclamante pidió tasación de costas y a raíz de haberse alzado, esta Cor-

EXPROPIACION

129

te elevó los honorarios a tres mil quinientos escudos; h) dictado el cúmplase se remitieron las copias para la dictación del respectivo decreto de pago;

4º—Que nuestra ley procesal distingue los actos en donde hay contienda civil entre partes de los actos de jurisdicción no contenciosa. Los primeros pueden dar lugar al procedimiento ordinario o al extraordinario. Los segundos tienen señalada su tramitación en el Libro IV del Código de Enjuiciamiento. Sin embargo, estos últimos, bien pueden también transformarse en contenciosos cuando se hace oposición por legítimo contradictor y en tal caso se debe seguir el juicio que corresponde.

Dentro de esta nomenclatura, la expropiación por causa de utilidad pública ha sido considerada como cuestión no contenciosa y a ella se refiere el Título XV del Libro Cuarto, modificado por leyes posteriores;

5º—Que así las cosas, y atendido el mérito de estos autos, el caso que se juzga tiene la naturaleza de un asunto de jurisdicción voluntaria, sin que

obste a esta conclusión la práctica de someter el conocimiento de los reclamos que se formulen, a la decisión del Juzgado que señale el Presidente de la Corte, porque bien pudieran presentarse los interesados directamente al Juzgado de Turno en lo civil que corresponda;

6º—Que en materias no contenciosas es aplicable el precepto contenido en el artículo 821 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: "Pueden los Tribunales, variando las circunstancias, y a solicitud del interesado, revocar o modificar las resoluciones negativas que hayan dictado, sin sujeción a los términos y formas establecidos para los asuntos contenciosos. Podrán también en igual caso revocar o modificar las resoluciones afirmativas, con tal que esté aún pendiente su ejecución".

El legislador empleó en este caso una expresión demasiado amplia, al decir: "que esté aún pendiente su ejecución", por lo que se hace necesario fijarle su alcance, para cuyo efecto se debe recurrir a la historia fidedigna de la ley —artículo 19 del Código Civil—.

En el proyecto de don José Bernardo Lira el actual artículo 821 estaba redactado en la siguiente forma: "Pueden los Tribunales variar o modificar las providencias y resoluciones que dicten en estos negocios sin sujeción a los términos y formas establecidas respecto de los que pertenecen a la jurisdicción contenciosa".

En la Comisión Revisora el señor Campillo pidió se suprimiera este precepto, porque estimó que no era conveniente dejar entregadas a la voluntad de las partes o de los jueces estas modificaciones. Pero a su observación contestó el señor Cood argumentando que no existía peligro, ya que siguiendo el espíritu del artículo, no se cae en el efecto retroactivo de las resoluciones, ni se perjudica a terceros.

El señor Humeres pidió que se modificara el artículo restringiéndolo a las resoluciones denegatorias y en el solo caso de la alteración de las circunstancias, "con tanta más razón cuanto que el remedio de la apelación que la ley concede puede servir al interesado para reclamar contra resoluciones

que le nieguen lo que cree tener derecho de obtener;

7º—Que de la discusión en comento se infiere que los legisladores se preocuparon de no atentar contra la no retroactividad de las resoluciones judiciales ni de amagar los intereses de terceros, procurando, en todo caso, que no se cayera en el abuso de hacer re-ver un asunto para lograr las pretensiones que durante la tramitación normal no lograron alcanzarse;

8º—Que en el caso que se juzga el reclamante ejercitó todos los derechos que la ley le confería, sometiendo incluso la decisión del asunto al tribunal de alzada; y obtuvo como monto de la indemnización una suma muy superior a la que se le había fijado por la Comisión expropiadora, aun cuando no todo lo que pretendía. Todavía más, su abogado patrocinante estimó en ambas instancias las costas personales y logró un importante honorario;

9º—Que en esas condiciones el Tribunal a quo, después de dictar el cúmplase, ordenó remitir al organismo correspon-

EXPROPIACION

131

diente las copias necesarias para la dictación del decreto respectivo.

De modo que acceder a las pretensiones del recurrente equivaldría darle a la nueva resolución que se dictara en la causa un carácter retroactivo, fuera de que con ello se vulneraría el interés del Fisco, que se ha opuesto a una nueva revisión del asunto, contrariándose con todo ello el espíritu del citado artículo 821 del Código de Procedimiento Civil;

10°—Que, de otra parte, la resolución cuya modificación se pretende, no se encuentra “pendiente en su ejecución” sino cumplida, pues estos términos deben entenderse en su sentido jurisdiccional, de manera que salido el asunto de la esfera del campo procesal-judicial, ya no puede decirse que esté pendiente. En la especie, el Juez de la causa dictó el cúmplase y envió las copias para que se extendiera el respectivo decreto de pago; ejecutando de esta manera lo resuelto. Lo que resta es de carácter administrativo y, por lo tanto, es ajeno al conocimiento de los tribunales de justicia;

11°—Que, por último, negar lugar a lo pedido, importa también interpretar la ley acorde con los principios que siguen en la actualidad las complejas relaciones económicas y sociales, las que han dado origen a un derecho cuyo absolutismo está cediendo paso a la evolución que han experimentado los intereses de la colectividad.

En este sentido no puede ser indiferente a los sentenciadores la finalidad de orden público que se pretende con la expropiación que ha motivado estas gestiones, pues la faja de terreno que se ha ordenado pagar al reclamante tiene por objeto destinarla al camino que se está construyendo entre Concepción y Talcahuano.

En mérito de lo expuesto, y conforme a lo que previenen los artículos 10 N° 10 de la Constitución Política del Estado; artículo 19 del Código Civil; y artículos 144, 817 y 821 del Código de Procedimiento Civil, se confirma, con costas del recurso, la resolución apelada de veintisiete de Agosto último, que se lee a fojas 189.

VOTO DISIDENTE.—Acordada con el voto en contra del Ministro señor Hernández,

quien estuvo por revocar la resolución apelada y declarar que se hace lugar a lo pedido en lo principal del escrito de fojas 180, en virtud de las siguientes consideraciones:

1) Que don René Lazo Fernández, en representación de los actores, solicita se cite a las partes a un comparendo con el objeto de designar peritos que informen sobre el valor actual de lo expropiado y monto del reajuste de la expropiación que no fue oportunamente pagada y cuyo cumplimiento está aún pendiente, acogiéndose su petición de aumentar el precio de la indemnización en una proporción igual al aumento que ha experimentado el costo de la vida desde la fecha de la sentencia de primera instancia hasta ahora, o bien en la proporción que se determine por el Tribunal después de oír el dictamen de los peritos y demás antecedentes que se produzcan;

2) Que por sentencia de 6 de Mayo de 1963, corriente a fojas 144, se fijó en E° 53.745,08 el valor del terreno expropiado. Este fallo fue confirmado por esta Corte, por resolución de

cinco de Agosto del mismo año, que se lee a fojas 161. Remitido el expediente a primera instancia, se le puso el cúmplase por providencia de 28 de Septiembre del expresado año 1963, que rola a fojas 166 vuelta;

3) Que el 11 de Abril del año en curso, se ordenó remitir copias del fallo de primera y segunda instancia, el cúmplase respectivo, su notificación y certificado de estar ejecutoriados al Ministerio de Obras Públicas (fojas 177 vuelta) quien acusó recibo de estas comunicaciones el 8 de Mayo último, por oficio que corre agregado a fojas 178 de esta gestión;

4) Que hasta la fecha el valor de la indemnización que reguló la sentencia de seis de Mayo de mil novecientos sesenta y tres no ha sido pagado a los demandantes, en circunstancias que desde esta fecha hasta ahora ha transcurrido un año y cinco meses;

5) Que la expropiación consiste en "un procedimiento de Derecho Público por el cual el Estado, mediante un acto unilateral, priva a una persona de un bien de su dominio en ra-

EXPROPIACION

133

zón de utilidad pública calificada por una ley, incorporándolo definitivamente a su patrimonio, previo el pago de la correspondiente indemnización”;

6) Que nuestra Constitución Política, en su artículo 10 Nº 10, asegura a todos los habitantes de la República “la inviolabilidad de todas las propiedades sin distinción alguna”. Agrega, a continuación, en el inciso 2º que “nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial, o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una ley. En este caso, se dará previamente al dueño la indemnización que se ajuste con él o que se determine en el juicio correspondiente”;

7) Que como es de todos sabido la ley que autoriza la expropiación hace las veces de título y modo de adquirir, la cual una vez consumada, produce entre otros efectos, el de transferir al expropiante el pleno dominio del bien objeto de ella;

8) Que mientras no se proporcione la debida indemnización al dueño del bien expropiado, la expropiación no ha llegado a su término ni se ha consumado, ya que no se ha cumplido con el requisito del pago previo de dicha indemnización que la Carta Fundamental consulta y, por lo tanto, el dominio de la cosa expropiada permanece en el antiguo propietario. El pago o consignación, determina, entonces, el momento en que la expropiación se perfecciona y a partir de este instante nacen para el organismo que expropia sus derechos sobre el bien y cesan los que hasta entonces tenía sobre el mismo, el expropiado;

9) Que la desvalorización de la moneda debe ser considerada al efectuar el pago de una indemnización expropiatoria, si se desea que ésta corresponda a ser equivalente al sacrificio económico hecho por el propietario afectado. El proceso inflacionista que ha sufrido el país desde hace años, que se ha traducido en una manifiesta depreciación de la moneda, no puede ser excluido, sin atentar contra elementales principios

de justicia y equidad, en la regulación del importe de esa indemnización. Si se considera, además, que ésta debe ser integral y justa, es decir, debe comprender no sólo el valor de la cosa expropiada, sino los daños y perjuicios causados y calculada de tal manera que en lo posible deje al propietario del bien en una situación similar a la que tenía con antelación al acto expropiatorio, resulta lógico concluir que para conseguir estos objetivos, pueden los tribunales variar o modificar sus resoluciones en relación con el justiprecio o indemnización fijada al valor de la cosa expropiada mientras la expropiación no se perfeccione o se ejecute;

10º—Que esta conclusión es obvia si se considera que el trámite de la expropiación es un asunto de jurisdicción voluntaria o no contenciosa y en consecuencia le es aplicable el artículo 821 del Código de Procedimiento Civil que dispone que “pueden los Tribunales, variando las circunstancias, y a solicitud del interesado revocar o modificar las resoluciones negativas que hayan dictado, sin sujeción a los términos y for-

mas establecidas para los asuntos contenciosos.

Podrán también en igual caso revocar o modificar las resoluciones afirmativas, con tal que esté aún pendiente su ejecución”;

11) Que consta de los antecedentes de autos, que el organismo expropiante no ha cancelado todavía el valor del predio objeto de la expropiación, la que, por lo mismo, no se encuentra consumada. En estas condiciones, aparece atendible la petición de los demandantes formulada en el escrito de fojas 180, ya que con ella se cumple en la especie con el principio que inspira este procedimiento en orden a que la valorización del inmueble que ha de expropiarse debe hacerse con relación al valor que tiene a la fecha de la expropiación, la que se perfecciona, como se ha dicho, en el momento en que se cancela al interesado el pago de la indemnización. Con ello se trata de lograr que esta indemnización corresponda al valor actual de la cosa y sea el equivalente más aproximado a

EXPROPIACION

135

la verdadera estimación del bien de cuyo dominio se priva al propietario. el Ministro señor Cánovas y el voto, su autor.

Devuélvase.

Agréguese el impuesto.

Redactó el fallo de mayoría

Dictada por los señores Ministros titulares de la Ilustrísima Corte, don José Cánovas Robles.